



UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CONTADOR PÚBLICO

TESINA

Derecho concursal comparado:
Argentina-Francia.

UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

Tutor: Dra. Miriam KAUFMAN

Alumna: Marina Lain

Índice

I Introducción y objetivos del trabajo.....	1
II Procedimientos de insolvencia. Régimen legal de los Concursos y Quiebras en Argentina y en Francia.....	1
III Funcionarios y empleados intervinientes en los procedimientos de insolvencia.....	4
IV Apertura y desarrollo de un procedimiento de Concurso Preventivo y Redressement Judiciaire. Comparación.....	10
V Tratamiento de los créditos laborales y contratos de trabajo.....	44
VI Apertura y desarrollo de un procedimiento de quiebra y de Liquidation Judiciaire. Comparación.....	48
VII Privilegios.....	76
VIII Concurso en caso de agrupamiento, extensión de la quiebra y del saneamiento judicial, pequeños concursos y quiebras. Procedimiento de liquidación simplificado..	81
IX Sobreendeudamiento de persona física en Francia.....	85
X Conclusiones.....	87
XI Bibliografía.....	91
XII Anexo.....	93

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

1. Introducción. Objetivos del trabajo.

La actual ley de concursos y quiebras en nuestro país es la Ley 24.522 del año 1995 que establece el régimen legal de dichos procedimientos y cuyo antecedente directo es la ley 19.551 del año 1972.

En la legislación francesa debemos remitirnos a la ley 2005-845 de 2005 la cual ha profundamente modernizado el derecho de empresas en dificultad. Dicha ley, que integra el Código de Comercio Francés (libro VI), reemplazó a la antigua ley que databa del año 1985.

El objetivo fundamental del presente trabajo consiste en poder comparar la legislación concursal argentina con la legislación concursal francesa, a partir del desarrollo de los procesos concursales de Quiebra y Concurso Preventivo, Liquidation Judiciaire y Redressement Judiciaire. Y analizar la actuación profesional del Contador público en uno y otro caso, demostrando que su actuación es imprescindible y esencial en ambos.

2. Procedimientos de insolvencia. Régimen legal de los Concursos y Quiebras en Argentina y en Francia.

En nuestro actual sistema jurídico positivo, el término “Concurso” es genérico en cuanto se refiere tanto a la Quiebra que es el proceso concursal destinado a la liquidación, como al Concurso Preventivo que es un proceso concursal de prevención o reorganización, el cual se logra mediante un acuerdo preventivo entre el deudor y todos o parte de sus acreedores. Su objetivo es dar al deudor insolvente una oportunidad para que reorganice la estructura financiera de su pasivo y si tiene actividad empresarial, solucione las causas de la crisis y evite la liquidación de la actividad y el patrimonio.

Existen también, además de estos procesos concursales clásicos, otros mecanismos más informales de solución de la insolvencia y de las crisis económicas o financieras de carácter general, denominados Acuerdos Preconcursoales o Paraconcursoales. Ésta es una forma simplificada, extrajudicial y voluntaria de celebrar acuerdos entre el deudor y todos o parte de sus acreedores para dar fin a la crisis o estado de cesación de pagos. Estos acuerdos son verdaderos contratos entre las partes que se rigen por la legislación

ordinaria o contractual pero pueden ser sometidos a un procedimiento concursal abreviado para convertirlos en verdaderos acuerdos preventivos que sean obligatorios para toda una clase de acreedores, a pesar de que no todos hayan prestado conformidad. Para ello se requiere la homologación judicial, sin embargo en la actual legislación se los sigue llamando Acuerdos Preventivos Extrajudiciales.

Por su parte, en la legislación francesa, encontramos un Procedimiento de Salvaguarda (Procédure de sauvegarde) cuyo objetivo es salvaguardar, como su nombre indica, a la empresa y los empleados ante serias dificultades. Este procedimiento, introducido al Código de Comercio Francés mediante la ley del 2005, puede ser abierto sin necesidad que la empresa se encuentre en cesación de pagos, pero debe encontrarse en dificultades que puedan conducirla al mismo. Además tiene la característica de permitir que los directivos de la empresa conserven la gestión de la misma, nombrándose un administrador judicial solamente para las funciones de vigilancia y asistencia. Este procedimiento fue una verdadera innovación. Es un procedimiento que se encuentra entre los procedimientos preventivos y los procedimientos colectivos de saneamiento y liquidación. Se trata de un procedimiento colectivo pero a diferencia del saneamiento y la liquidación, el deudor no se encuentra aún en cesación de pagos y se puede beneficiar con la suspensión de acciones individuales de sus acreedores a fin de poder negociar, en forma serena, un plan que le permita reorganizarse. La apertura de este procedimiento solo puede ser pedida por el propio deudor quien debe probar sus dificultades económicas.

Existe también lo que es el Saneamiento Judicial (Redressement Judiciaire) cuyo objetivo es el saneamiento de la empresa, el mantenimiento de su actividad y sus puestos de trabajo y la cancelación de su pasivo. Este procedimiento, en pocas palabras, consiste en la aprobación de un plan de saneamiento por parte del Tribunal de Comercio, que puede suponer la continuidad de la empresa imponiendo esperas y quitas a los acreedores o su cesión a un tercero. Es lo más parecido que encontramos al Concurso Preventivo de nuestra legislación.

Otro procedimiento de insolvencia en Francia es la Liquidación Judicial (Liquidation Judiciaire), equivalente a la Quiebra en la legislación argentina.

También encontramos en Francia otros procedimientos de carácter preventivo, previos a la insolvencia, como son el Procedimiento de Alerta (Procédure d'alerte), la Conciliación (Procédure de conciliation) y el Mandato ad hoc (Mandat ad hoc).

El primero consiste en la alerta que reciben los directivos de la empresa a través de diversas personas. Puede tratarse de un procedimiento de alerta por los auditores de la empresa. Todas las sociedades anónimas y otras sociedades comerciales así como personas jurídicas de derecho privado no comerciantes pero que tengan una actividad económica (y que cumplan 2 de las 3 premisas siguientes: que tengan 50 empleados o más, que tengan un volumen de negocios igual o mayor de 3,1 millones de euros o que tengan un balance igual o mayor de 1,5 millones de euros), están obligadas a designar auditores. Las asociaciones que se benefician de subvenciones públicas también deben cumplir con esta obligación. Los auditores están obligados a alertar a los directivos de la empresa sobre cualquier hecho que comprometa la continuación de la explotación. Algunos datos pueden surgir de la contabilidad mientras que otros pueden ser de distinta naturaleza (por ejemplo la pérdida de un cliente vital). El auditor puede llegar hasta el Tribunal de Comercio si sus advertencias no son escuchadas. Puede tratarse también de una alerta efectuada por el Comité de la empresa. El Comité de empresa es un órgano que existe prácticamente en todas aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores. Aquellas empresas que no tengan Comité, el derecho de alerta corresponde a los delegados del personal pero siempre y cuando existan más de 50 trabajadores. El Comité puede demandar explicaciones a los directivos de la empresa y en caso de respuesta insatisfactoria, demandar la ayuda de un experto contable que será remunerado por la empresa. La alerta puede también realizarla el presidente del Tribunal de Comercio convocando a los representantes de una sociedad comercial, un grupo económico, una empresa individual comercial o artesanal, que tengan dificultades, para dar explicaciones. El conocimiento del presidente puede provenir de cualquier acto, documento o procedimiento así como también de información que le sea brindada por los auditores. Finalmente el procedimiento de alerta puede ser ejercido por los socios con su posibilidad de efectuar por escrito sus preguntas a los directivos de la empresa. Este derecho se deduce de las reglas propias de determinadas sociedades comerciales.

El Mandato ad hoc, por su parte, consiste en el nombramiento por parte del Tribunal de Comercio o del Tribunal de Gran Instancia de un Mandatario ad hoc, a pedido del representante de la empresa. El presidente del Tribunal fija su misión la cual, según las circunstancias, puede consistir desde una simple auditoría de la empresa a la negociación de soluciones amigables con los principales acreedores de la misma. El

nombramiento de un Mandatario ad hoc no suspende ninguna acción individual de los acreedores y su función se desarrolla en total confidencialidad.

La Conciliación es un procedimiento del que se benefician las empresas que se encuentran en dificultades, actuales o previsibles, de tipo jurídico, económico o financiero y que no se encuentran en cesación de pagos por más de 45 días. Como podemos ver la dificultad puede ser de carácter jurídico y no solamente patrimonial. Además este procedimiento permite que en el caso de encontrarse en cesación de pagos por muy poco tiempo (menos de 45 días), el deudor pueda negociar sus deudas en un clima más sereno que un procedimiento de saneamiento (Redressement judiciaire), en forma no judicial, más rápida y confidencial. El acuerdo que se obtiene puede ser homologado por el Tribunal.

3. Funcionarios y empleados intervinientes en los procedimientos de insolvencia.

El título IV, capítulo II de la LCQ argentina se refiere a los funcionarios y empleados de los concursos. Se considera como tales al síndico, al coadministrador y a los controladores del cumplimiento del acuerdo preventivo y de la liquidación en la quiebra. Las atribuciones que la ley confiere a cada funcionario son indelegables, sin perjuicio del desempeño de empleados. También menciona este título a los evaluadores, enajenadores y otros empleados.

El primero de los funcionarios al que se refiere este capítulo es el Síndico. Podrán inscribirse para actuar como tales, los contadores públicos con una antigüedad mínima en la matrícula de 5 años y también estudios de contadores que cuenten entre sus miembros con mayorías de profesionales que tengan un mínimo de 5 años de antigüedad en la matrícula. Los integrantes de estudios no pueden al mismo tiempo inscribirse como profesionales independientes. Para su selección se tomará en cuenta los antecedentes profesionales y académicos, experiencia en el ejercicio de la sindicatura, si tienen títulos universitarios de especialización en sindicatura concursal, etc. Y cada cuatro años la Cámara de Apelación correspondiente forma 2 listas: una de la categoría A integrada por estudios y una de la categoría B integrada por profesionales independientes. En conjunto deben contener una cantidad no inferior a 15 síndicos por juzgado con 10 suplentes. Luego, dentro de los 4 años, las designaciones se sortean por

el juez dentro de la lista de la categoría A o B (según corresponda, de acuerdo a la magnitud y complejidad del concurso) del juzgado respectivo, computándose separadamente los concursos preventivos y las quiebras. El designado sale de la lista hasta tanto hayan actuado todos los candidatos. En el concurso preventivo el síndico actúa hasta tanto se homologa el acuerdo y se toman y ejecutan las medidas tendientes a su cumplimiento, pero en el caso de pequeños concursos (Art. 288 LCQ) continúa actuando para controlar el cumplimiento de acuerdo preventivo en caso de no haberse constituido comité de acreedores a tal efecto. En la quiebra, el síndico actúa en todas las etapas incluso en la de liquidación (pero sujeto al control del comité de acreedores). La designación de síndico es irrenunciable salvo causa grave que impida su desempeño. La renuncia comprende la totalidad de las sindicaturas en las que el funcionario actúe y debe ser juzgada por la cámara de apelaciones con criterio restrictivo. Debe seguir en sus funciones hasta la aceptación del cargo de su reemplazante. El síndico también puede ser removido del cargo según establece el Art. 255 de la LCQ, existen también causales de excusación y recusación (Art. 256 LCQ) y puede solicitar licencia por motivos que impidan temporalmente el ejercicio del cargo pero no pueden ser superiores a 2 meses por año corrido. El síndico puede requerir asesoramiento profesional cuando la materia exceda su competencia, y patrocinio letrado, pero todos los honorarios son a su exclusivo cargo. El síndico debe actuar personalmente y cuando se trate de estudios se debe indicar cuales profesionales asumen ese deber.

Por otra parte tenemos a los Coadministradores que son funcionarios de la quiebra, que pueden ser designados para actuar conjuntamente con el síndico cuando se dispone la continuación de la explotación empresarial posquiebra. Es designado por el juez en la misma resolución que autoriza la continuación de la actividad. Este rol debe ser desempeñado por un graduado universitario en administración de empresas o persona especializada en el ramo del establecimiento o de la empresa cuya continuación posquiebra se dispusiera.

El Art. 260 de la LCQ se refiere al Comité de acreedores. Hay dos provisorios (uno designado por el juez en la resolución de apertura y otro que lo reemplaza, también designado por el juez pero en oportunidad de dictar la resolución sobre la categorización de acreedores) que actúan como órgano de información y consejo y después existe el definitivo cuya función es el control del cumplimiento del acuerdo preventivo, y de la liquidación en la quiebra. Sus integrantes son elegidos por los acreedores por mayoría de capital y debe contar con un mínimo de tres acreedores. La

propuesta de acuerdo preventivo debe incluir la conformación y constitución del comité definitivo de acreedores. El comité que se ha constituido para controlar el cumplimiento del acuerdo preventivo mantiene sus funciones en caso de declaración de quiebra por incumplimiento del mismo. El comité (ya sea el provisorio o el definitivo) tiene amplias facultades de información y consejo pudiendo requerir información tanto al síndico como al concursado, exigir la exhibición de libros y registros, proponer planes de custodia y conservación del patrimonio del concursado, solicitar audiencias, etc. El comité debe informar de su gestión a los restantes acreedores con la periodicidad que se indique en el acuerdo, la que no deberá ser inferior a cuatro meses y mensualmente en el caso de la quiebra. Se puede prever una remuneración para los integrantes del comité, la cual deberá estar regulada en el acuerdo y, en caso de quiebra, por el juez teniendo en cuenta la naturaleza y extensión de las funciones que cumpla. El comité podrá contratar asesores profesionales que considere convenientes para que lo asista en su tarea con cargo a los gastos del concurso. Los integrantes del comité podrán ser removidos y también sustituidos en cualquier oportunidad por los acreedores, bajo el mismo régimen de mayorías de su designación.

En el Art. 261 de la LCQ tenemos a los Enajenadores que se ocupan de la enajenación de activos en la quiebra. Puede tratarse de martilleros, bancos comerciales o de inversión, intermediarios profesionales en enajenación de empresas o cualquier otro experto en el tema. El martillero es designado por el juez y se requiere que tenga casa abierta al público y 6 años de antigüedad en la matrícula. Por la tarea de enajenación reciben solo la comisión del comprador y pueden realizar los gastos impuestos por esta ley, los de costumbre y los expresamente autorizados por el juez.

En el Art. 262 LCQ se menciona a los Evaluadores. Su tarea consiste en la valuación de las acciones o cuotas representativas del capital en el caso de “salvataje”. Estará a cargo de bancos de inversión, entidades financieras autorizadas por el BCRA o estudios de auditoría que cuenten con una antigüedad mayor a 10 años. La Cámara de apelaciones cada 4 años formará una lista de evaluadores. De esta lista, el comité de acreedores propone una terna para que elija el juez. La remuneración del evaluador la fijará el juez.

El Art. 263 de la LCQ menciona la posibilidad que tiene el síndico de solicitar autorización al juez para contratar Empleados en el número y por el tiempo que sean requeridos para la eficaz y económica realización de sus tareas.

El Art. 3 de la ley 24.522 se refiere al Juez (con competencia ordinaria) de un proceso concursal y señala las siguientes reglas: en el caso de personas físicas es competente el juez del lugar donde se encuentra la sede de administración de sus negocios, o en su defecto, al del lugar del domicilio, en el caso de que el deudor tuviese varias administraciones será competente el juez del lugar donde se encuentra la administración del establecimiento principal y si no se puede determinar corresponde al juez que hubiera prevenido; si se trata de personas jurídicas de carácter privado regularmente constituidas y sociedades donde el Estado nacional, provincial o municipal tengan participación será competente el juez del lugar del domicilio; si en cambio hablamos de sociedades no constituidas regularmente entiende el juez del lugar de la sede o del lugar del establecimiento o explotación principal; por último tratándose de deudores domiciliados en el exterior será competente el juez del lugar de la administración en el país y a falta de éste el del lugar donde se encuentre la explotación o actividad principal.

En la legislación francesa tenemos: al Tribunal, al Mandatario Judicial, al Administrador judicial, al Comisionado de Justicia, a los Controladores, al Representante de los trabajadores, al Subastador Judicial y al Comisionado encargado de la ejecución del plan entre otros.

El Tribunal competente es el Tribunal de Comercio si el deudor es comerciante (persona física o jurídica) o se encuentra matriculado en el Registro de Oficios. El Tribunal de Gran Instancia (sería como las Cámaras nuestras) es competente en los restantes casos. Territorialmente es competente el juez que corresponde al domicilio que el deudor declara como asiento de su empresa o actividad. En caso de extensión el Tribunal de origen continua siendo competente.

El Mandatario Judicial es el encargado de representar el interés colectivo de los acreedores, aconsejar al deudor, invitar a los acreedores a declarar sus créditos, a verificarlos y a elaborar una lista que luego someterá al comisionado de justicia, supervisar el curso del procedimiento, manejar los créditos laborales, recibir las proposiciones de un plan de saneamiento y establecer un reporte en caso de un procedimiento homónimo, puede ser nombrado comisionado encargado de ejecutar dicho plan, entre otras misiones. Su designación es obligatoria en la sentencia de apertura.

Con respecto al Administrador Judicial, su misión será fijada por el Tribunal. Puede que la misma consista en asistir al deudor en todos los actos relativos a la gestión o en algunos de ellos, o también puede consistir en llevar adelante la administración total de la empresa en cuyo caso se pueden nombrar expertos para que lo asistan en su tarea de gestión. El Tribunal fija la remuneración de éstos expertos. Durante su misión el administrador debe respetar todas las obligaciones legales y convencionales que correspondan al deudor. El administrador además con su firma puede hacer funcionar las cuentas bancarias y postales del deudor cuando éstas le han sido bloqueadas. Cuando no se designa un administrador judicial, el deudor ejerce con autorización del mandatario judicial ciertas funciones reservadas al primero. Por ejemplo puede decidir la continuación de los contratos en curso, establece el proyecto de plan con ayuda de un experto nombrado por el Tribunal, entre otras. Su nombramiento es facultativo cuando la empresa tiene un volumen de negocios menor a 3 millones de euros anuales (sin taxes) y emplea menos de 20 asalariados.

La Comisión Nacional de Administradores Judiciales y Mandatarios Judiciales establece los requisitos necesarios para acceder a las listas respectivas:

- En primer lugar se debe ser francés o nacional de un Estado miembro de la Comunidad Europea o Estado parte del Acuerdo del Espacio Económico Europeo.
- No se deben haber realizado actos contrarios al honor o la probidad que hayan dado lugar a una condena penal.
- No haber sido el autor de actos de igual naturaleza que hayan dado lugar a una sanción disciplinaria o administrativa de destitución o revocación entre otras.
- No haber sido sancionado con quiebra personal o una de las medidas de interdicción personal dispuestas en el Código de Comercio Francés.
- Es necesario también haber obtenido un diploma de un nivel mínimo igual a “BAC +4” en derecho, ciencias económicas o gestión; o un DESCF (diploma de estudios superiores contables y financieros); o un DEC (diploma de experto contable).
- Además se debe haber aprobado un examen de ingreso a una pasantía que importará el conocimiento sobre nociones de derecho y contabilidad. Se trata de 7 pruebas escritas para los administradores judiciales y 6 pruebas escritas para los mandatarios judiciales más una prueba oral de discusión para ambos cargos. Sólo podrán presentarse 3 veces a la misma. Luego se realiza la